

**2.16. JURISPRUDENCIA AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID (pp.
2-8)**

—

**2.16. JURISPRUDÈNCIA AMBIENTAL A LA COMUNITAT DE MADRID (pp.
9-14)**

ANTONIO FORTES MARTÍN

Profesor titular de Derecho Administrativo / Professor titular de Dret Administratiu

Universidad Carlos III de Madrid

Sumario: 1. Régimen sancionador en la EIA. 2. Vertidos a las aguas. 3. Residuos. 4. Urbanismo y medio ambiente (actividades clasificadas). 5. Ruido.

En la crónica del segundo semestre de 2010 y del conjunto de los numerosos pronunciamientos dictados, principalmente, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (en adelante TSJM), nos ocupamos de destacar ahora cinco de ellos, más uno del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid. Para facilitar la comprensión del lector y por razones puramente sistemáticas, los vamos a agrupar en los siguientes órdenes materiales, a saber, i) régimen sancionador en materia de evaluación de impacto ambiental; ii) vertidos a las aguas; iii) residuos; iv) urbanismo y medio ambiente (actividades clasificadas); y v) ruido.

1. Régimen sancionador en la EIA

En el apartado de evaluación de impacto ambiental, la Sentencia del TSJM núm. 331/2010, de 11 de marzo (recurso contencioso-administrativo núm. 616/2007), resuelve, estimándolo, el recurso contencioso interpuesto por una industria titular de una concesión minera frente a la Resolución de la Consejería de Medio Ambiente por la que se impone a la industria una multa de noventa mil euros.

La empresa minera decide desplazar a la explotación un grupo móvil de clasificación de áridos desconociendo si es preciso o no contar con nueva declaración de impacto ambiental. Los servicios de inspección de la Consejería de Medio Ambiente constatan que en la mina se halla ubicado un grupo móvil de clasificación de áridos, aunque no está en funcionamiento.

Frente al parecer de la Comunidad Autónoma, para la que, independientemente de que el equipo móvil permanezca parado, su instalación constituye infracción ambiental tipificada en el artículo 58 de la Ley 2/2002, de 19 de junio, de evaluación ambiental, la Sala juzgadora resuelve en sentido contrario señalando que la mera llevanza del equipo a la parcela minera no es constitutiva de infracción. El artículo 58 de la Ley 2/2002 se refiere al “inicio o ejecución de obras, proyectos o actividades”, por lo que el depósito

de una maquinaria, sin hacerla entrar en funcionamiento y sin que conste ninguna labor de conexión, anclaje o instalación, no puede considerarse como actividad reveladora de inicio de obras o proyectos. Por tal motivo, el TSJM estima el recurso y anula la resolución sancionadora.

2. Vertidos a las aguas

La Sentencia del TSJM núm. 194/2010, de 26 de febrero de 2010 (recurso núm. 918/2006), resuelve el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Comunidad de Madrid contra la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto contra Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo, que revisa la autorización otorgada al Canal de Isabel II para efectuar un vertido de aguas residuales procedentes de la EDAR de Miraflores de la Sierra.

El Canal de Isabel II solicitó en su día autorización de vertido de aguas residuales procedentes de la EDAR de Miraflores al cauce del arroyo Miraflores, título autorizatorio que fue finalmente concedido.

Años más tarde, el Canal de Isabel II solicita autorización para el uso de aguas residuales depuradas de la misma EDAR con destino al riego de zonas verdes de sus instalaciones. La Confederación Hidrográfica autoriza tal uso, pero aprovecha la misma tramitación procedimental para revisar la autorización de vertido de aguas residuales invocando la entrada en vigor, al tiempo de esta segunda solicitud, de la modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobada por Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, extremo que es discutido por el Canal de Isabel II.

Finalmente, el TSJM sentencia que el clausulado de la autorización inicial y la propia regulación contenida en el Real Decreto 606/2003 permiten la revisión de la autorización, aunque esta se realice en el marco del procedimiento iniciado por la propia recurrente para autorización de reutilización interna de las aguas residuales de la EDAR, por lo que se desestima el recurso.

3. Residuos

La Sentencia del TSJM núm. 1225/2010, de 17 de junio (recurso contencioso-administrativo núm. 372/2009) resuelve el recurso contencioso interpuesto contra la Ordenanza de limpieza en espacios públicos y de gestión de residuos, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid en sesión de 27 de febrero de 2009.

El recurrente pretende la anulación total de la Ordenanza o, subsidiariamente, la de doce de sus artículos. De todos los artículos impugnados interesa destacar en esta crónica ambiental la situación que presentan los artículos 10, 31, y 78.

Comenzando por el artículo 10, este determina que, sin perjuicio de las competencias municipales en materia de limpieza, se establece el deber de colaboración de la ciudadanía mediante la limpieza de las aceras con una anchura mínima de dos metros, o si es de mayor ancho, de la franja más próxima a la fachada, y que tal deber debe ser cumplido por los habitantes de los edificios, los comerciantes o los propietarios, en el caso de solares sin edificar. Pues bien, frente a lo que supone una práctica común y tradicional en muchos de nuestros pueblos y ciudades, donde el vecino voluntariamente es quien barre y limpia el trozo de acera próximo a su edificio o establecimiento, el TSJM sentencia que la limpieza viaria es una competencia del Ayuntamiento, en los términos del artículo 25.2.1) LrBRL, que debe ejercer por sí mismo o través de otras formas de gestión de servicios públicos, “no siendo posible trasladar esta obligación que el legislador ha impuesto al Municipio a los particulares”. A mayor abundamiento, el artículo 31.3 CE señala que solo se pueden establecer prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley, de modo que la obligación de limpiar la vía pública, como prestación de carácter personal, solo puede venir impuesta por una Ley y no mediante una Ordenanza municipal. Esto determina, a juicio del TSJM, que el artículo 10 deba ser declarado nulo.

En segundo lugar, el artículo 31 prevé la implantación y el fomento de la recogida selectiva de residuos urbanos. A fin de favorecerla, el citado precepto dispone que los residuos urbanos se presenten separados en las fracciones, por todos conocidas, de envases ligeros, papel y cartón, vidrio, y resto de residuos, debiendo depositar dichos residuos en los recipientes específicos suministrados por el Ayuntamiento.

El recurrente impugna este precepto porque impone, a su modo de ver, la separación en origen de los residuos, sin fundamentar la conveniencia de la separación, amén de que, a

tenor de las dimensiones medias de las casas en Madrid, resulta excesivo que cada ciudadano cuente en su vivienda con hasta cuatros recipientes distintos para depositar los distintos residuos generados.

El TSJM desestima la impugnación dirigida frente a este precepto porque, en atención a lo dispuesto en el artículo 20.3 de la Ley 10/98, de 21 de abril, de residuos, y el artículo 9.1 de la Ley 11/97, de 24 de abril, de envases y residuos de envases, la Ordenanza no determina la forma como los particulares deben almacenar en sus casas los residuos, sino la forma como estos deben ser depositados en los recipientes o contenedores dispuestos por el Ayuntamiento en las vías públicas.

Finalmente, la impugnación dirigida contra el artículo 78.3 de la Ordenanza es estimada por el TSJM, que lo declara nulo. Este precepto, relativo a los sujetos responsables, determina que, tratándose de obligaciones colectivas, tales como uso, conservación y limpieza de recipientes normalizados, limpieza de zonas comunes, etc., la responsabilidad se atribuirá a la correspondiente comunidad de propietarios o habitantes del inmueble, formulándose en su caso las denuncias contra dicha comunidad o, en su caso, contra la persona que ostenta la representación.

El TSJM, asumiendo la tesis del recurrente, estima que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 130.3 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el respeto al principio de culpabilidad exige que solo las personas físicas o jurídicas puedan ser responsables de las infracciones, por lo que procede la anulación del apartado tercero del artículo 78 de la Ordenanza.

4. Urbanismo y medio ambiente (actividades clasificadas)

En este apartado nos hacemos eco de dos pronunciamientos de fecha 11 de marzo de 2010 y 13 de mayo de 2010. Se trata de la Sentencia núm. 770/2010 (recurso de apelación núm. 1762/2009) y de la Sentencia núm. 1026/2010 (recurso de apelación núm. 304/2010), respectivamente.

En ambas se discute la denegación, para los recurrentes, de la licencia para la instalación de una estación base de telefonía móvil en una zona de equipamiento

deportivo, por resultar contrario al planeamiento urbanístico. El TSJM estima los recursos de apelación presentados, anula las resoluciones administrativas atacadas en un principio y ordena retrotraer las actuaciones para que, tras la oportuna tramitación del expediente de actividades clasificadas, se dicte la resolución que proceda, sin que pueda fundamentarse la denegación de la licencia en motivos urbanísticos, como aquí sucedió al amparo del artículo 30 del viejo Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

Para llegar a este fallo, el TSJM recrea, desde el ejercicio por parte de los entes locales de sus competencias en materia de medio ambiente y urbanismo, la posibilidad de exigir licencia municipal a las obras relativas a instalaciones técnicas y redes de servicio. Y pese a que el TSJM es consciente, como ha reconocido precedentemente el Tribunal Supremo, del interés público y social que representa el servicio de telefonía móvil, también es cierto que “el derecho de la Compañía Telefónica a instalar cualquiera de los elementos de que precise el servicio que tiene concedido ha de entenderse sin merma de la competencia de la Administración local para ejercer todas las potestades que conlleva en orden a los fines generales que le están encomendados, ya sea en materia urbanística, de tráfico o en interés del municipio”.

El problema, en los dos casos que nos ocupan, se centra en la denegación de la licencia de instalación de base de telefonía móvil solicitada por no contemplarse como uso autorizado en la zona de ordenación del Plan General de Ordenación Urbana vigente en el municipio. El TSJM parte de la premisa de que la enumeración de usos permitidos en las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana no es un *numerus clausus*, “ya que no pueden detallarse en él con relación exhaustiva los usos permitidos, sino la clase de usos en función del planeamiento; y, en tal sentido, no puede hoy caber duda de la necesidad de facilitar los medios necesarios para satisfacer las exigencias de las comunicaciones, convenientes en toda clase de equipamientos...”. Dicho esto, el leitmotiv del pronunciamiento gira en torno a la idea de que la infraestructura no es un uso urbanístico en sentido estricto, sino que, más bien, constituye un servicio urbanístico. Como infraestructura que es una estación base de telefonía móvil, su instalación está al servicio del uso establecido en el Plan, con independencia de cuál sea este, industrial, dotacional deportivo, residencial, etc. En suma, como señala el TSJM,

“el establecimiento de infraestructuras por lo tanto no se corresponde con un uso de los que el Plan establece al calificar el suelo, sino que es común a todos los usos”. De este modo, la entrada en escena de un nuevo servicio público que necesita nuevas infraestructuras no precisa, para el establecimiento de sus redes, que el suelo esté calificado como infraestructural.

5. Ruido

La Sentencia núm. 230/2010, de 8 de junio de 2010, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Madrid, resuelve el recurso contencioso-administrativo interpuesto por una asociación de vecinos de Pozuelo de Alarcón contra el Decreto del Alcalde de la citada localidad de 29 de agosto de 2007, por el que se autoriza la celebración de espectáculos al aire libre durante las fiestas en honor a la Patrona de la localidad.

Esta Sentencia hace frente a la problemática tensión existente entre, por un lado, el derecho al ocio y al disfrute y, por otro lado, el derecho al descanso. En concreto, la recurrente, en representación de unos vecinos afectados, se muestra en contra de la instalación de un recinto ferial en una zona verde, muy próxima a una zona residencial, para albergar todo tipo de usos incompatibles con los propios de las zonas verdes, como son los de discoteca móvil, chiringuitos, kioscos, etc., que tienen una importante incidencia sonora, pues se demuestra la superación de los umbrales máximos establecidos en la Ordenanza municipal.

El Juez, a la hora de resolver este conflicto, identifica una realidad, como es la relativa a la contaminación acústica producida por las actividades y festejos organizados o sufragados por el Ayuntamiento. Para ello, valora la suficiencia e idoneidad de las medidas adoptadas por el Ayuntamiento o si dichas actuaciones deben suspenderse y autorizarse en otro lugar.

La Sentencia, muy bien fundamentada, analizando el carácter y el alcance de una actividad como es una fiesta patronal, recrea, con la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de contaminación acústica, así como con la normativa sectorial aplicable (de espectáculos

públicos y actividades recreativas y de medio ambiente), cómo y por qué determinadas actividades lúdicas pueden impedir y poner en peligro el derecho al descanso y la tranquilidad. La decisión alcanzada por el Juez, sobre la base de la jurisprudencia autonómica en la materia, es la de hacer prevalecer “el derecho al descanso, a la tranquilidad, al disfrute del domicilio como lugar ajeno a las inmisiones molestas, frente al derecho al ocio y a sus distintas manifestaciones”. Como bien apunta el Juez, “no se trata de acabar con las fiestas, pero sí de ponérsele límites, de regularlas, de manera que su ejercicio se efectúe del modo que menos perjudique a terceros”.

Como quiera que este pronunciamiento se suma a la sólida jurisprudencia que tutela los derechos de los ciudadanos que, pacientemente, se ven obligados a soportar episodios de contaminación acústica causada por la celebración de fiestas, en el caso en concreto, se resuelve concluyendo que los recurrentes no tienen la obligación legal de soportar las actividades lúdico-festivas, y que estas deben ser trasladadas a otro lugar donde no se alteren las condiciones de vida de los vecinos, dada su incompatibilidad con los usos propios de las zonas verdes y el carácter residencial del entorno, en atención a que no es posible adoptar medidas eficaces que impidan la contaminación acústica. Añade el fallo que, en el caso de que en las próximas fiestas no sea posible el traslado a un lugar más adecuado, se obliga al Ayuntamiento a adoptar las medidas posibles para evitar que los eventos y actividades que se tenga previsto desarrollar puedan superar los valores límite de contaminación acústica contemplados en las normas que resulten aplicables, realizando, a tales efectos, las mediciones oportunas.

Sumari: 1. Règim sancionador en l'EIA. 2. Abocaments a les aigües. 3. Residus. 4. Urbanisme i medi ambient (activitats classificades). 5. Soroll.

En la crònica del segon semestre de 2010 i del conjunt dels nombrosos pronunciaments dictats, principalment, per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (en endavant TSJM), ara en destacarem cinc, a més d'un del Jutjat Contenciós Administratiu de Madrid.

Per facilitar-ne la lectura al lector i per raons de pura sistemàtica, els agruparem tots en els ordres materials següents: i) Règim sancionador en matèria d'avaluació d'impacte ambiental; ii) Abocaments a les aigües; iii) Residus; iv) Urbanisme i medi ambient (activitats classificades); v) Soroll.

1. Règim sancionador en l'EIA

En l'apartat d'avaluació d'impacte ambiental, la Sentència del TSJM núm. 331/2010, d'11 de març (recurs contenciós administratiu núm. 616/2007), resol, estimant-lo, el recurs contenciós interposat per una indústria titular d'una concessió minera enfront de la resolució de la Conselleria de Medi Ambient per la qual s'imposa a la indústria una multa de noranta mil euros.

L'empresa minera decideix desplaçar a l'explotació minera un grup mòbil de classificació d'àrids, desconeixent si cal o no cap declaració d'impacte ambiental nova. Els serveis d'inspecció de la Conselleria de Medi Ambient constaten que a la mina s'hi troba ubicat un grup mòbil de classificació d'àrids però que no funciona.

Enfront del parer de la Comunitat Autònoma, per a la qual independentment que l'equip mòbil romanguí aturat, la instal·lació ja constitueix una infracció ambiental tipificada en l'article 58 de la Llei 2/2002, de 19 de juny, d'avaluació ambiental, la Sala que ho jutja ho resol en contra i assenyala que la mera administració de l'equip a la parcel·la minera no és constitutiva d'infracció. L'article 58 de la Llei 2/2002 fa referència a l'"*inicio o ejecución de obras, proyectos o actividades*", per la qual cosa el mer dipòsit d'una maquinària, sense haver-la posat en funcionament i sense que en consti cap feina de

connexió, ancoratge o instal·lació, no pot considerar-se com a activitat reveladora d'inici d'obres o projectes. Per la qual cosa, el TSJM estima el recurs i n'anul·la la resolució sancionadora.

2. Abocaments a les aigües

La Sentència del TSJM núm. 194/2010, de 26 de febrer de 2010 (recurs núm. 918/2006), resol el recurs contenciós administratiu interposat per la Comunitat de Madrid contra la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat contra la resolució de la Confederació Hidrogràfica del Tajo que revisa l'autorització d'abocament atorgada al Canal d'Isabel II per haver abocat d'aigües residuals procedents de l'EDAR de Miraflores de la Sierra.

El Canal d'Isabel II va sol·licitar al seu dia autorització per abocar aigües residuals procedents de l'EDAR de Miraflores al llit del rierol Miraflores; títol autoritzatori que finalment es va concedir.

Anys més tard, el Canal d'Isabel II sol·licita autorització per poder utilitzar aigües residuals depurades de la mateixa EDAR per regar les zones verdes de les seves instal·lacions. La Confederació Hidrogràfica autoritza aquest ús, però aprofita en la mateixa tramitació procedimental per revisar l'autorització d'abocament d'aigües residuals invocant l'entrada en vigor, al mateix temps d'aquesta segona sol·licitud, de la modificació del Reglament del domini públic hidràulic aprovada pel RD 606/2003, de 23 de maig, extrem que discuteix el Canal d'Isabel II.

Finalment, el TSJM sentència que el conjunt de clàusules de l'autorització inicial i la regulació que conté el RD 606/2003, permeten revisar l'autorització, encara que es realitzi dins del procediment iniciat per la mateixa part recurrent per a l'autorització de reutilització interna de les aigües residuals de l'EDAR, per la qual cosa el recurs es desestima.

3. Residus

La Sentència del TSJM núm. 1225/2010, de 17 de juny (recurs contenciós administratiu núm. 372/2009), resol el recurs contenciós interposat contra l'ordenança de neteja dels

espais públics i de gestió de residus aprovada pel Ple de l'Ajuntament de Madrid en sessió de 27 de febrer de 2009.

La part recurrent pretén anul·lar totalment l'ordenança o, subsidiàriament, dotze articles. De tots els articles impugnats n'interessa destacar, en aquesta crònica ambiental, la situació que presenten els articles 10, 31, i 78.

Començant per l'article 10, aquest determina que sense perjudici de les competències municipals en matèria de neteja, s'estableix el deure de col·laboració de la ciutadania amb la neteja de les voreres en una amplària mínima de dos metres, o si és més ampla, en la franja més pròxima a la façana, deure que han de complir els habitants dels edificis, els comerciants o els propietaris de solars sense edificar. Doncs bé, davant del que suposa una pràctica comuna i tradicional en els nostres pobles i ciutats, on el veí voluntàriament és qui escombra i neteja el tros de vorera pròxim al seu edifici o establiment, el TSJM sentència que la neteja viària és competència de l'Ajuntament, segons l'article 25.2.1) LrBRL, que ha d'exercir per si mateix o través d'altres formes de gestió de serveis públics "*no siendo posible trasladar esta obligación que el legislador ha impuesto al Municipio a los particulares*". Per si calia, l'article 31.3 CE assenyala que només poden establir-se prestacions personals o patrimonials de caràcter públic d'acord amb la llei, de manera que l'obligació de netejar la via pública, com a prestació de caràcter personal, només pot estar imposada per llei i no mitjançant una ordenança municipal. Això determina, a judici del TSJM, que l'article 10 es declari nul.

En segon lloc, l'article 31 preveu la implantació i el foment de la recollida selectiva de residus urbans, i a fi d'afavorir-la, el precepte esmentat disposa que els residus urbans es presentin separats per fraccions, com tothom sap, segons siguin envasos lleugers, paper i cartó, vidre, i resta de residus, i que s'han de dipositar en els contenidors específics subministrats per l'Ajuntament.

La part recurrent impugna aquest precepte perquè, des del seu punt de vista, imposa haver de separar els residus en origen, sense fonamentar la conveniència de la separació tenint en compte que en funció de les dimensions mitjanes de les cases a Madrid, el fet que cada ciutadà tingui al seu habitatge fins a quatre recipients diferents per dipositar els residus generats resulta excessiu.

El TSJM desestima la impugnació dirigida enfront d'aquest precepte perquè, segons el que disposa l'article 20.3 de la Llei 10/98, de 21 d'abril, de residus, i l'article 9.1 de la Llei 11/97, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos, l'ordenança no determina la manera amb què els particulars han d'emmagatzemar els residus a casa, sinó la manera amb què s'han de dipositar als recipients o contenidors disposats per l'Ajuntament a les vies públiques.

Finalment, el TSJM estima la impugnació dirigida contra l'article 78.3 de l'ordenança, i és declarat nul. Aquest precepte, relatiu als subjectes responsables, determina que, tractant-se d'obligacions col·lectives, com l'ús, la conservació i la neteja de contenidors normalitzats, la neteja de zones comunes, etc., la responsabilitat s'ha d'atribuir a la corresponent comunitat de propietaris o habitants de l'immoble, i les denúncies s'han de formular, si s'escau, contra aquesta comunitat o contra la persona que la representa.

El TSJM, assumint la tesi de la part recurrent, estima que, en virtut del que disposa l'article 130.3 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, el respecte al principi de culpabilitat exigeix que només les persones físiques o jurídiques puguin ser responsables de les infraccions, per la qual cosa procedeix l'anul·lació de l'apartat tercer de l'article 78 de l'ordenança.

4. Urbanisme i medi ambient (activitats classificades)

En aquest apartat ens fem ressò de dos pronunciaments de data 11 de març de 2010 i 13 de maig de 2010. Es tracta de la Sentència núm. 770/2010 (recurs d'apel·lació núm. 1762/2009) i de la Sentència núm. 1026/2010 (recurs d'apel·lació núm. 304/2010), respectivament.

En ambdues s'hi discuteix la denegació, a les parts recurrents, de la llicència per instal·lar una estació base de telefonia mòbil en una zona d'equipament esportiu, perquè va en contra del planejament urbanístic. El TSJM estima els recursos d'apel·lació presentats, anul·la les resolucions administratives atacades en principi i ordena retrotreure les actuacions, perquè, després de l'oportuna tramitació de l'expedient d'activitats classificades, es dicti la resolució que procedeixi, sense que pugui

fonamentar-se la denegació de la llicència per motius urbanístics, com aquí va succeir a l'empara de l'article 30 de l'antic Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses.

Per arribar a aquesta resolució, el TSJM recrea, des de l'exercici per part dels ens locals de les seves competències en matèria de medi ambient i urbanisme, la possibilitat d'exigir la llicència municipal a obres relatives a instal·lacions tècniques i xarxes de servei. I malgrat que el TSJM és conscient de l'interès públic i social que representa el servei de telefonia mòbil, com ha reconegut precedentment el Tribunal Suprem, també és cert que *“el derecho de la Compañía Telefónica a instalar cualquiera de los elementos de que precise el servicio que tiene concedido ha de entenderse sin merma de la competencia de la Administración local para ejercer todas las potestades que conlleva en orden a los fines generales que le están encomendados, ya sea en materia urbanística, de tráfico o en interés del municipio”*.

El problema, en els dos casos que ens ocupen, se centra en la denegació de la llicència d'instal·lació de base de telefonia mòbil sol·licitada per no haver-se previst com a ús autoritzat a la zona d'ordenació del Pla General d'Ordenació Urbana vigent al municipi. El TSJM parteix de la premissa que l'enumeració d'usos permesos en les normes urbanístiques del Pla General d'Ordenació Urbana no és un *numerus clausus* *“ya que no pueden detallarse en él con relación exhaustiva los usos permitidos, sino la clase de usos en función del planeamiento; y, en tal sentido, no puede hoy caber duda de la necesidad de facilitar los medios necesarios para satisfacer las exigencias de las comunicaciones, convenientes en toda clase de equipamientos”*. Dit això, el *leit motiv* de tot el pronunciament gira entorn de la idea que la infraestructura no és un ús urbanístic en sentit estricte, sinó que més aviat constitueix un servei urbanístic. I com a infraestructura que és una estació base de telefonia mòbil, la instal·lació està al servei de l'ús establert en el Pla, amb independència de si és industrial, dotacional esportiu, residencial, etc. En suma, com assenyala el TSJM, *“el establecimiento de infraestructuras por lo tanto no se corresponde con un uso de los que el Plan establece al calificar el suelo, sino que es común a todos los usos”*. D'aquesta manera, l'entrada en joc d'un nou servei públic que necessita noves infraestructures no requereix que el sòl es qualifiqui com a infraestructural a l'hora d'establir-hi xarxes.

5. Soroll

La Sentència núm. 230/2010, de 8 de juny de 2010, del Jutjat Contenciós Administratiu núm.10 de Madrid, resol el recurs contenciós administratiu interposat per una associació de veïns de Pozuelo d'Alarcón contra el decret de l'alcalde d'aquesta localitat de 29 d'agost de 2007 pel qual s'autoritza la celebració d'espectacles a l'aire lliure durant les festes en honor a la patrona de la localitat.

Aquesta sentència fa front a la problemàtica tensió existent entre, d'una banda, el dret a l'oci i al gaudi, i, d'altra banda, el dret al descans. En concret, la part recurrent, en representació d'uns quants veïns afectats, es mostra en contra de la instal·lació d'un recinte firal en una zona verda molt pròxima a una zona residencial, perquè pot acollir usos incompatibles amb els propis de les zones verdes, com són els de discoteca mòbil, guinguetes, quioscos, etc., amb una important incidència sonora, en demostrar que es poden superar els llindars màxims establerts en l'ordenança municipal.

El jutge, a l'hora de resoldre aquest conflicte, identifica la realitat, com és la relativa a la contaminació acústica produïda per les activitats i festes organitzades o sufragades per l'Ajuntament. I per això valora la suficiència i la idoneïtat de les mesures adoptades per l'Ajuntament, o si les actuacions s'han de suspendre i s'han d'autoritzar en un altre lloc.

La sentència, molt ben fonamentada, havent analitzat el caràcter i l'abast d'una activitat com una festa patronal, recrea, amb la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional i del Tribunal Europeu de Drets Humans en matèria de contaminació acústica, així com amb la normativa sectorial aplicable (d'espectacles públics i activitats recreatives i de medi ambient), com i per què determinades activitats lúdiques poden impedir i posar en perill el dret al descans i a la tranquil·litat. I la decisió del jutge, sobre la base de la jurisprudència autonòmica en la matèria, és la de fer prevaler *“el derecho al descanso, a la tranquilidad, al disfrute del domicilio como lugar ajeno a las inmisiones molestas, frente al derecho al ocio y a sus distintas manifestaciones”*. Com apunta el jutge, *“no se trata de acabar con las fiestas, pero sí de ponerse límites, de regularlas, de manera que su ejercicio se efectúa del modo que menos perjudique a terceros”*.

Com sigui que aquest pronunciament se suma a la sòlida jurisprudència que tutela els drets dels ciutadans que pacientment es veuen obligats a suportar episodis de contaminació acústica causada per la celebració de festes, en aquest cas concret, es resol que els recurrents no tenen l'obligació legal de suportar aquestes activitats ludicofestives, per la qual cosa s'han de traslladar a un altre lloc on no s'alterin les condicions de vida dels veïns, atesa la incompatibilitat amb els usos propis de les zones verdes i atès el caràcter residencial de l'entorn, en consideració que no és possible adoptar mesures eficaces que impedeixin la contaminació acústica. I la resolució afegeix que si en les pròximes festes no es poden traslladar-les a un lloc més adequat, s'obliga l'Ajuntament a adoptar mesures per evitar que els esdeveniments i les activitats que s'hagin de dur a terme puguin superar els valors límit de contaminació acústica previstos en les normes aplicables, i a realitzar, a tal efecte, els mesuraments oportuns.